



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPEDIENTE N° 24.007/2021

**AUTOS: “NUEVO CENTRAL ARGENTINO SA c/ADMINISTRACION  
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social, a fin de dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir pronunciamiento:

**LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de la impugnación presentada por NUEVO CENTRAL ARGENTINO SA contra la Resolución de AFIP N°1.852-E-2021 mediante la cual se rechazó un anterior cuestionamiento reclamando diferencias en las contribuciones patronales con base en el Decreto 814/01 por la suma de \$ 349.384.386 (imputable a capital \$ 82.252.560,51, intereses \$ 139.992.535,13 y una multa de \$ 54.377.018,17 con fundamento en el artículo 16 de la Resolución General 1566, t.o. 2010), por el periodo 01/2017 a 06/2019.

La apelante plantea la nulidad de lo actuado en sede administrativa con fundamento en el art. 14, inc. b), de la ley 19.549 reprochando violación del principio de legalidad y defensa en juicio. Argumenta la inexistencia de deuda pues, según expresa, su mandante es una sociedad anónima con participación estatal minoritaria en los términos previstos por el art. 1° de la ley 22.016. A su juicio su parte obró correctamente al aplicar la alícuota contenida en el art. art. 2° inc. b del decreto 814/01 sobre las contribuciones patronales, motivo por el cual debe rectificarse el encuadre jurídico efectuado por el organismo. Manifiesta también que aun en la hipótesis en que no se hiciera lugar al reclamo, debe eximírsela del pago de intereses y multa por la inexistencia de mora culpable pues en todo caso NUEVO CENTRAL ARGENTINO SA habría actuado incurso en un error excusable en la interpretación de la norma legal que correspondía aplicar, más no con dolo o culpa.

Desde el punto de vista procesal entiendo corresponde la habilitación de la presente instancia.

Ello por cuanto, si bien en nuestro derecho positivo la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la C.N. y art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica, tal imperativo legal puede ser atenuado en aquellos casos en que existe una desproporcionada

Fecha de firma: 02/02/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#36076325#339339032#20230201123137568



## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica (CSJN 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallo 312:2490; 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda. c/DGI” Fallo 312:1741; 02/08/05 “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP” Fallo 328:2938 entre otros) admitiéndose la validez de la presentación de un seguro de caución en sustitución del depósito previo (CSJN 04/11/08 “Orígenes AFJP c/AFIP-DGI” Fallo 331:2480). En el caso, el presentante acompañó póliza de seguro de caución N°799.779 emitido por Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros por la suma de \$ 349.384.386 por lo que procederé a la apertura de la presente instancia.

Respecto al planteo de nulidad articulado cabe expresar que en nuestro ordenamiento jurídico los entes administrativos tienen amplias facultades de control y verificación sobre los particulares con el objeto de asegurar que efectúen, conforme a derecho, las cotizaciones al sistema de seguridad social con el objeto de asegurar a todos los habitantes los beneficios del sistema previsional instituido por las normas vigentes (conf. arts. 14 bis de nuestra Carta Magna, 6°, 7°, 10 y 11 de la ley 24.241).

El referido sistema de control descansa sobre la base de las declaraciones efectuadas por los sujetos que deben actuar como agentes de retención y efectuar aportes y contribuciones al sistema previsional y fiscal (arts. 12, ley 24.241 y 11, ley 11.683) lo que autoriza a la AFIP a verificar la corrección de las declaraciones juradas presentadas y, en su caso, reclamar las diferencias patrimoniales que estime adeudadas. Incluso se la autoriza a imponer sanciones al contribuyente en caso de incumplimiento.

Al respecto la doctrina ha expresado que a fin de obtener un funcionamiento eficaz la norma requiere obligatoriamente del empleador el suministro de información y la expedición de documentación o certificaciones que acrediten diversos hechos (conf. Etala, Carlos A., “Derecho de la Seguridad Social”, p. 380, ed. Astrea) y, una vez que el empleador o responsable presenta su declaración jurada por las obligaciones previsionales de un período concreto, la Administración puede comprobar los datos que el propio sujeto pasivo ha incorporado en su declaración, así como también puede investigar los hechos imponderables no declarados o los declarados parcialmente, en tanto es titular de la potestad de comprobación como de la potestad de investigación.

Como puede observarse no nos encontramos frente a actos administrativos que carezcan de causa o que impliquen el ejercicio de vías de hecho violatorias de derecho de los particulares sino, ante el ejercicio legítimo de potestades que nuestra Constitución concede al Poder Ejecutivo para administrar el país y velar





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

por el cumplimiento regular de las leyes sancionadas por el Congreso, por lo que la nulidad alegada resulta improcedente.

En el caso a estudio, la apelante sostiene que abonó correctamente las alícuotas previstas por el art. 2º decreto 814/2001 por encontrarse, en su opinión, incluida entre las entidades y organismos comprendidos en el art. 1º de la ley 22.016.

Manifiesta que es una sociedad que contó siempre con participación estatal y a partir de una resolución ministerial de 1996 el Estado paso a ser poseedor del 16% de las acciones clase A y de todos los atributos públicos correspondientes a la concesión.

El Decreto 814/2001 estableció una alícuota del 20% para empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467. Para los restantes empleadores no incluidos en la nómina anterior, dispuso la aplicación de una alícuota del 16% que posteriormente fue elevada al 17% por imperio de la ley 25.565. Este último porcentaje se aplicará, según texto del inciso b. del artículo 2do del referido decreto a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22.016 y sus modificatorias.

La enumeración taxativa dispuesta por esta última norma comprende: a) sociedades de economía mixta regidas por el decreto ley 15.349/46 ratificado por ley 12.962, b) empresas del Estado regidas por la ley 13.653( t.o. por dto. 4053/55 y modificatorias) o por leyes especiales, c) las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria regidas por la ley 19.550, d) las sociedades anónimas con simple participación estatal regidas por la ley 19.550, e) sociedades del estado regidas por la ley 20.705, f) empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y municipales -todas ellas aunque presten servicios públicos-, g) los bancos y demás entidades financieras nacionales regidos por la ley 21.526 y/o las leyes de su creación, según corresponda, h) todo otro organismo nacional, provincial y municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso.

Frente a la enumeración transcrita, la interpretación que hace la A.F.I.P., según entiende el apelante, es incorrecta pues fundándose en distintos dictámenes limita la enumeración del mencionado artículo 1º de la ley 22.016 a aquellas entidades que forman parte del artículo 8 de la ley 24.156, es decir, contempla únicamente a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, excluyendo de este modo la posibilidad que a la apelante se le aplique el inciso b. del artículo 2º del mencionado decreto 814/01, lo que resulta contrario su





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

verdadero sentido y alcance, por ser de aplicación al sector privado en general con la excepción de las entidades enumeradas en el art. 1 de la ley 22.016.

Ahora bien, el artículo 165 de la ley 27.430 sustituyó el artículo 2do. del referido Decreto 814/2001 al establecer “con alcance general para los empleadores pertenecientes al sector privado una alícuota única del 19,50% correspondientes a las contribuciones patrimoniales sobre la nómina salarial con destino a las subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social aclarando que dicha alícuota será también de aplicación para las entidades y organismos comprendidos en el art. 1º de la ley 22.016 y sus modificatorias, ya sea que pertenezcan al sector público o privado.

Más tarde el art. 19 de la ley 27541 denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” modificó dichos porcentuales estableciendo uno del 20,40% para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector servicios o en el sector comercio de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa N.º 220 y sus modificatorias siempre que sus ventas totales superen, en todos los casos, los límites por categorización como empresa mediana tramo 2 efectuado por el órgano pertinente con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23660 y 23661 y un adicional del 18% para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior, alícuota que sería de aplicación a las entidades del sector público comprendidas en el art. 1º de la ley 22.016 y sus modificatorias.

Planteada así la cuestión, y dado que la apelante es una sociedad anónima con participación estatal minoritaria -naturaleza admitida por el organismo de control- la decisión recurrida deviene incorrecta y debe ser revocada. La propuesta coincide con lo expresado por distintos pronunciamientos de esta Cámara (ver CFSS Sala I sent. del 19/05/22 “Transener SA c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

En este orden de ideas y dado la particularidad del planteo deducido en autos las costas se impondrán en el orden causado (art. 68 última parte C.P.C.C.N.).

Por lo expuesto propongo se habilite la presente instancia haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto y revocando la decisión impugnada. Imponer las costas en el orden causado dado las particularidades que presenta la cuestión sometida a conocimiento (art. 68 “in fine” C.P.C.C.N.). Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 15 UMA (\$ 156.000, conf. CSJN Ac.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

25/2022) y en cuanto a los correspondientes a la representación letrada de la parte demandada estese a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.

**EL DOCTOR JUAN A. FANTINI DIJO:**

Adhiero al voto que encabeza el decisorio aunque disiento en cuanto a los honorarios regulados en favor de la representación letrada de la parte actora.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa” sent. del 04/09/2018 se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 2.600.000 conf. CSJN Acordada 25/2022), importe al que se adicionara el IVA en caso de corresponder (C.S.J.N. “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación”, sent. del 16/06/93 Fallos 316:1523). Respecto a los honorarios de representación letrada de la parte demandada coincido en la aplicación del artículo 2º de la ley 27.423.

**EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:**

Adhiero a la propuesta de mi colega de Sala Dr. Fantini.

En virtud de lo expresado el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, 3º) Revocar la decisión impugnada, 4º) Imponer las costas en el orden causado atento la especial naturaleza de la cuestión aquí en debate (art. 68 “in fine” C.P.C.C.N.). 4º) Regular los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 2.600.000) conf. CSJN Ac. 25/2022. Con relación a los honorarios de representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

JUAN FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

ALP.

